Un ejército para la ciencia - Mediterráneo - 05/07/2019

BANCO DE DATOS

Un ejército para la ciencia

La falta de inversión privada en I+D+I obliga al Estado a ocuparse de un alto porcentaje de la financiación, a través de organismos públicos de investigación, a los que no siempre se saca todo el rendimiento que cabría suponer

Alfredo Semprún- Madrid

Si la potencia tecnológica de un país se mide por inversión de sus empresas en I+D+I, España no sale muy bien parada. De hecho, según los últimos datos disponibles, referidos a 2017, sólo el 54,9 por ciento del dinero dedicado a la investigación y la innovación en nuestro país procedía del sector privado, cuando lo deseable es que ese porcentaje suponga el 75 por ciento. El resultado es que España dedica el 1,2 por ciento del PIB a la innovación tecnológica, muy lejos del 2,95 por ciento de Alemania o del 2,25 por ciento de Francia. Las causas son conocidas: el tejido empresarial español está muy fragmentado, con muchas micro-empresas, y la mayor parte de su actividad se dedica al sector servicios, que demanda poca tecnología. Las empresas grandes, salvo excepciones de mérito, prefieren importar la tecnología a desarrollar productos propios. Es el Estado, a través de los organismos públicos de investigación y de la red de universidades, el que trata de colmar el vacío empresarial. Sin contar con las inversiones propias de las comunidades autónomas, muy vinculadas a las universidades locales, la Administración estatal tiene a sueldo a más de cien mil trabajadores dedicados a la ciencia, 90.000 de ellos como profesores en los centros universitarios. El resto, hasta 17.000, dependen de los grandes centros investigadores públicos, como el CESIC o el CIEMAT, que se llevan la parte del león, o el Instituto de Salud Carlos III, que, por cierto, es uno de los centros de control de enfermedades y de investigación biomédica de referencia en el mundo. Pero detrás de estas cifras de contratación, ciertamente abultadas, puesto que casi equivalen al conjunto de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, existen serias disfunciones de, al parecer, imposible resolución. Por ejemplo, los altos niveles de contratación temporal, que en el CSIC, que cuenta con 122 institutos investigadores, supone casi el 43 por ciento del empleo; la falta de renovación del personal investigador «senior» y la endogamia del sistema, que lo hace poco permeable al conjunto de la sociedad. La palma del trabajo en precario se la llevan los llamados «profesores asociados», con sueldos por debajo del SMI, pero que desempeñan funciones docentes en las Universidades españolas. Suponen 20.000 de los 90.000 profesores. Un ejército para la ciencia, pero insuficiente.

La clave

- **Más de cien mil funcionarios y empleados públicos están dedicados en España a la ciencia.** Casi tantos como guardias civiles y policías nacionales